

C/ KATHERINE ALEJANDRA GONZÁLEZ NEIRA.

TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES EN PEQUEÑAS CANTIDADES.

ROL ÚNICO: 2300650901-0.

ROL INTERNO: 191-2024.

Santiago, diecisiete de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS, OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Tribunal e intervinientes. Que durante el día siete de marzo de dos mil veinticinco, ante esta Sala del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrada por las magistradas doña Gabriela Carreño Barros, Presidente de Sala, doña Silvana Vera Riquelme como redactora y doña María Alejandra Rojas Contreras como tercera jueza integrante, se llevó a efecto el juicio oral de la causa **Rol Interno N° 191-2024, RUC 2300650901-0**, seguido en contra de **KATHERINE ALEJANDRA GONZÁLEZ NEIRA**, cédula nacional de identidad N° 19.477.122-3, nacida el 22 de octubre de 1996, chilena, 28 años de edad, soltera, operaria de maquinaria, domiciliada en Pasaje Lorenzo Peñaipil N° 776, Villa Los Ciruelos, comuna de Buin, representada en la audiencia por el defensor penal público **Rafael Jofré Inzunza**, para conocer los cargos que se han formulado en su contra por el delito de tráfico de sustancias estupefacientes en pequeñas cantidades previsto y sancionado en el artículo 4° en relación con el artículo 1° y la calificante del artículo 19 letra H, todos de la ley N°20.000.

Sostuvo la acusación en representación del Ministerio Público, el fiscal don Jorge Carmona Moret, con domicilio y forma de notificación ya registrados en el tribunal.

SEGUNDO: Acusación. Que la acusación del Ministerio Público contra la acusada, fue del siguiente tenor:

“El día 14 de junio de 2023, aproximadamente a las 11:15 horas, en el Centro Penitenciario Femenino “Mayor Marisol Estay”, ubicado en San Francisco N° 4756, comuna de San Miguel, la interna KATHERINE ALEJANDRA GONZÁLEZ NEIRA, privada de libertad por causa del Juzgado de Garantía de San Bernardo, por delito de tráfico ilícito de drogas, fue

sorprendida portando, teniendo y poseyendo la cantidad de 20 envoltorios de papel cuadriculados contenedores de cocaína base con un peso bruto de 3,1 gramos; la cantidad de 02 envoltorios de papel cuadriculados contenedores de Ketamina con un peso aproximado de 0,4 gramos; y la cantidad de 10 envoltorios de papel cuadriculados contenedores de Cannabis Satyiva – Marihuana, con un peso bruto de 2,1 gramos; todo ello con fines de ser transferidos y consumidos por terceras personas, sin contar con autorización competente”.

Estos hechos configuran, a juicio de la Fiscalía, un delito de TRAFICO ILICITO DE PEQUEÑAS CANTIDADES DE DROGA, contemplado en el artículo 4° en relación al artículo 1°, y artículo 19 letra h) de la ley 20.000 en grado de consumado, en los que le ha correspondido a la acusada una participación en calidad de autora.

Indica que respecto de la acusada concurre la circunstancia calificante prevista en el artículo 19 letra h) de la Ley 20.000. Se solicita se le imponga una pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo y multa de 20 unidades tributarias mensuales, penas accesorias legales artículo 29 del Código Penal, de conformidad con artículo 45 del Código Procesal Penal, en costas y el comiso de las especies incautadas, demás especies incautadas, así como la toma de Huella conforme a la Ley 19.970.

Se deja constancia que, los intervinientes no acordaron convenciones probatorias.

TERCERO: Alegatos de apertura. Que en el alegato de apertura del **Ministerio Público** se refiere a los hechos de la acusación, indicando la cantidad de envoltorios, los distintos tipos de sustancias, la situación de la acusada, la circunstancia del artículo 19 letra h) de la Ley 20.000. Se refiere a la prueba que rendirá.

La **defensa** señala que no cuestiona los hechos, que la droga era para consumo, no habiendo un indicador de tráfico, y en cuanto a la circunstancia del artículo H) del artículo 19 de la ley 20.000 la va a cuestionar.

CUARTO: Declaración de la acusada. Que, habiendo sido advertida por el tribunal, previamente, de su derecho a guardar silencio, la acusada renunció al mismo y prestó declaración en el siguiente tenor:

Señala que ese día la llamaron al abogado, don Luis Castillo. Salió de la torre 4. Habló con el abogado, la abrazó y se despidieron, pasa a la torre 3 a comprar estas cosas (cocaína, marihuana, tusi) a una señora – una interna- y al devolverse a su torre la allanan, sin encontrarle plata ni nada porque había comprado en la torre 3.

Consultada por el Ministerio Público señala que estaba en el patio de la torre 4 del CPF de San Miguel. Los hechos fueron el 3 o 4 de junio de 2022. Llevaba privada de libertad desde abril de 2022 por tráfico de drogas que le allanaron su casa. Solo llevaba su chauchero con \$30.000 para ver al abogado. No había mayor avance de su causa y se fue altiro. La droga que compró estaba envuelta en un papel higiénico, la abrió para saber que era, todos eran envoltorios blancos. Pagó por ellos los \$30.000 que llevaba. Se los guardó en su bolsillo derecho. Volvió a la torre 4, entrega la ficha y la teniente le dijo que tenía que allanarla y le dijo que tenías la droga. Se quedó callada, no dijo donde la adquirió, se pone nerviosa. Ese día parece que no declaró porque estaba nerviosa. La droga la adquirió para drogarse, en la calle también se drogaba. Hace seis meses aproximadamente está con sicóloga porque se corta los brazos por la ansiedad.

Consultada por la Defensa señala que la droga era para su consumo, se compró 20 papeles de pasta, 10 de marihuana y dos de “tusi”, lo que le dura para una tarde. La mayoría de las internas con que vive se drogan también. Antes compraba cuando estaba en San Miguel, le compraba siempre a las mismas, ahora en “Valpo” no hay para comprar. Su familia la iba a ver cuando estaba en Santiago, iban su madre, sus 3 hijas, las que cuida el papá y su mamá.

QUINTO: Prueba incorporada en el juicio oral. Que, a fin de acreditar los hechos contenidos en la acusación fiscal y la participación del acusado en ellos, **la fiscalía** incorporó durante la audiencia de juicio oral, los siguientes medios de prueba:

I. PRUEBA TESTIMONIAL:

1. MARGARITA JOSEFA CÁCERES RIVERA, Teniente Segundo de Gendarmería.

Consultada por el Ministerio Público señala que es testigo de la incautación de sustancias ilícitas de la imputada Katherine González Neira,

el 14 de junio de 2023 en la Cárcel de San Miguel, en horas de la mañana. Se encontraba de jefa de módulo, el 4 cree, y recepcionó un llamado de Cabo Pérez que estaba en la sala de abogados y le dice que la interna señalada estaba sospechosa, y cuando regresa ella la pasa del baño y la revisa y le incauta desde el bolsillo del pantalón 20 contenedores con 3,1 grs de cocaína, 2 envoltorios de 0,4 grs bruto de ketamina y 10 envoltorios de cannabis sativa con 2.1 grs. Le preguntó a ella si traía algo oculto o le habían entregado algo y dice que no. Se saca el polerón, lo revisa, y luego revisa el pantalón y ahí encuentra las sustancias. No dijo nada de donde obtuvo las sustancias, la llevó a salud para la constatación de lesiones, y luego se realizó el procedimiento de rigor, incluyendo las pruebas de campo. La interna estaba imputada por el tribunal de San Bernardo por tráfico de drogas.

Se exhibe de otros medios de pruebas lo siguiente:

- 1.- La incautación que encontró en el bolsillo de la interna. En la parte superior los 20 contenedores de cocaína, 2 de ketamina y los 10 de cannabis.
- 2.- Pesaje de los 10 envoltorios de cannabis sativa de 2.13 grs.
- 3.- Pesaje de los dos envoltorios de ketamina de 0.4 grs
- 4.- Pesaje de los 20 envoltorios de cocaína, peso de 3.1 gramos (se ve 3,11 grs)

Sabe que se leyeron sus derechos, después se pasa a guardia interna, no sabe si ella declaró.

Consultada por la Defensa señala que el Cabo le señala que había una interna de módulo en la sala de abogados, en actitudes sospechosa, que miraba, que se acomodaba sus bolsillos, que la revisara para descartar si era algo prohibido. Cuando ella llega le habilita el acceso al módulo, le pide que la acompañe a la guardia del módulo y que pase al baño para el procedimiento. No la tiene a la vista cuando va de la sala de abogados al módulo. Espera que la imputada llegue al módulo.

2. FERNANDO BENJAMÍN PÉREZ GUTIÉRREZ, Cabo Segundo de Gendarmería.

Consultado por el Ministerio Público señala que el 14 de junio de 2023 le toca cumplir funciones en la cárcel de San Miguel, ubicada en San Francisco 4756, en la reja 3, que es un punto de control donde las internas

vienen con una ficha donde las derivan donde corresponde. Viene de la sala de abogados. Ve a la interna González Neira la con actitudes sospechosas. Ella estaba en el módulo 4, tomando contacto con la Teniente Segundo Margarita Cáceres y le pide que registre a la interna por sospechosa. No es testigo de la revisión. La revisa, y le avisa que le incautó droga. Pilló 20 envoltorios de papel cuadriculado contenedores de color cocaína, dos envoltorios de papel cuadriculado de cannabis sativa y 2 contenedores de ketamina, pesando 3,1 grs, 2,1 grs y 0.4 grs, respectivamente. Con la prueba de campo se verifica la droga. Tiene dos causas por mantener droga en su poder, tráfico interno, Tiene una causa por tráfico ilícito de droga. Sindica a la acusada en la sala de audiencias. La vio a unos 7 metros nerviosa previo a entrar a la sala de abogados – entraba y salía ella, lo miraba- , ella entra, y el testigo pasa unas rondas preventivas, la ve que lo mira, él vuelve a su puesto. Cuando ella sale por su género no la puede revisar, así que le avisa a la Teniente Cáceres que la revise, ya que la interna habitaba el módulo 4.

Defensa no sabe quién le entregó la droga, no vio el traspaso de eso, pero si el nerviosismo de la interna que quiere esconderse algo en los bolsillos. La sigue por el pasillo al módulo 4, la tenía en visión. Estaba ubicado en la galería norte con un mesón y con visión de la galería norte, le avisó a la encargada de la torre 4. Por lo que sabe la Teniente Cáceres es la que hizo el registro. En su puesto ha pillado varias veces droga.

329 del Código Procesal Penal por el Ministerio Público: Señala que, desde su puesto, da aviso, la visualiza a la interna, indica que hay interna para revisar y le da las señas, la Teniente te le dice que baja, ella baja, ve a la Teniente, la Teniente la toma y la guía. La interna no se fue a otro módulo ni nada.

II. PRUEBA DOCUMENTAL:

1. Oficio Remisor de droga N° 14.30.10/2657/23 de fecha 15 de junio de 2023, NUE 6921084. 20 envoltorios de papel cuadriculados con sustancia de color blanco.

2. Acta de Recepción N° 4288-2023 de fecha 15 de junio de 2023, emitida por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, NUE: 6921084. 20 papelillos con presunta sustancia cocaína.

3. Oficio Remisor de droga N° 14.30.10/2656/23 de fecha 15 de junio de 2023, NUE 6921082. 10 envoltorios de papel cuadriculado con sustancia vegetal color verde.

4. Acta de Recepción N° 529 de fecha 15 de junio de 2023, emitida por el Servicio de Salud Metropolitano Sur, NUE: 6921082. 10 envoltorios de papel cuadriculado contenedor de hierba molida color café verdoso.

5. Oficio Remisor de droga N° 14.30.10/2655/23 de fecha 15 de junio de 2023, NUE 6921081. 2 envoltorios papel cuadriculado con sustancia color rosado.

6. Acta de Recepción N° 4289-2023 de fecha 15 de junio de 2023, emitida por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, NUE: 6921081. 2 papelillos, presunta sustancia ketamina.

7. Reservado N° 12843-2023, de fecha 10 de octubre de 2023, emitida por el Instituto de Salud Pública, relativo a la NUE: 6921081.

12843-2023- M1-1 polvo rosado, ketamina, sujeto a ley 20.000 Si.

8. Un Informe de efectos y peligrosidad para la salud pública de la Ketamina NUE 6921081, emitidos por Paula Fuentes Azocar, Perito Químico.

9. Reservado N° 12842-2023, de fecha 10 de octubre de 2023, emitida por el Instituto de Salud Pública, relativo a la NUE: 6921084.

12842-2023-m1-1 cocaína base 69%, sujeto a ley 20.000 si.

10. Un Informe de efectos y peligrosidad para la salud pública de la Cocaína Base NUE 6921084, emitidos por Paula Fuentes Azocar, Perito Químico.

11. Reservado N° 529 de fecha 27 de junio de 2023, del Servicio de Salud Metropolitano Sur, con NUE 6921082.

Resultado cannabis positivo, diez envoltorios conteniendo hierba de color café verdosa.

12. Un Informe de peligrosidad de los efectos y Riesgos del Consumo de la Cannabis-Marihuana, NUE 6921082, suscrito por perito Químico farmacéutico Jorge Barguetto Fernández.

III. PRUEBA PERICIAL:

1. Un Protocolo de Análisis Químico del Subdepartamento de Sustancias Ilícitas del Instituto de Salud Pública de Chile, Código de

Muestra 12842-2023-M1-1, con cadena de custodia NUE 6921084, emitido con fecha 10 de octubre de 2023, suscrito por la perito químico doña Paula Fuentes, del Instituto de Salud pública de Chile. Cocaína como sustancia principal, cocaína base 69% de concentración.

2. Un Protocolo de Análisis Químico del Subdepartamento de Sustancias Ilícitas del Instituto de Salud Pública de Chile, Código de Muestra 12843-2023-M1-1, con cadena de custodia NUE 6921081, emitido con fecha 10 de octubre de 2023, suscrito por la perito químico doña Paula Fuentes, del Instituto de Salud pública de Chile. Polvo rosado, conclusión: ketamina.

3. Un Protocolo de Análisis Ley 20.0000, Muestra Acta N° 529 del Servicio de Salud Metropolitano Sur, de fecha 22 de junio de 2023, suscrito por Jorge Barguetto Fernández, perito Químico Farmacéutico del laboratorio Central del Servicio de Salud Metropolitano Sur. NUE 6921082, resultado, al análisis químico si dio cuenta de la presencia de cannabinoles.

IV.- OTROS MEDIOS DE PRUEBA:

- Cuatro fijaciones fotográficas de los envoltorios y pesaje de droga incautada la acusada

La defensa no presenta prueba propia, se adhirió a la totalidad de la prueba del Ministerio Público.

SEXTO: Alegatos de Clausura. En su **alegato de clausura**, el **Ministerio Público** señala que la teoría del Ministerio Público es el ilícito de tráfico ilícito de drogas de pequeñas cantidades, artículo cuarto, ley 20.000. Indica que la norma en el inciso primero, parte final, establece el delito de microtráfico, a menos que justifique que esta droga esté destinada para el uso o consumo de personal exclusivo en el tiempo o a un tratamiento médico. Agrega que después de casi dos años de esta causa, ya en esta sede judicial, hasta el día de hoy la imputada, vía defensa, no ha justificado ninguna de esas dos situaciones; que más bien lo que ella señala en su declaración el día de hoy, distinta a los hechos de detención, es que efectivamente ahora pasó a comprar las sustancias después de la entrevista con el abogado, desviándose hacia el sector 3, como se llama a la Torre 3, y posteriormente fue hacia donde ella estaba en el sector de la Torre o Módulo 4.

Indica que eso se contradice con lo señalado por el testigo don Fernando Pérez Gutiérrez y doña Margarita Cáceres Rivera, que son los funcionarios de Gendarmería que presentó el Ministerio Público. Don Fernando efectivamente señala la actitud que presentaba la interna, tomando parte de sus vestimentas en la parte inferior, que es donde es incautada la droga por parte de doña Margarita. Se ratifica por los informes periciales que tenemos tres sustancias, ketamina, cocaína y efectivamente marihuana, se trata de una interna que estaba en prisión preventiva por el delito de tráfico ilícito de drogas, que según el relato de los funcionarios de Gendarmería, señalan que ya la interna tenía efectivamente asociado otros hechos de tráfico, que estaba privada de libertad por una causa de tráfico de drogas y que tenía dos tráficos internos dentro de la cárcel mientras estaba privada de libertad al interior de un recinto de detención donde se encuentra la interna. Finaliza señalando que efectivamente concurre a la circunstancia calificante de la 19 letra H de la ley 20.000, elevando la pena en un grado. Por ello solicita que sea condenada.

En la **clausura la defensa** señala que lo determinante es lo prohibido; y que lo prohibido es la cocaína, la marihuana y la ketamina. Se habla de cocaína de 0,9 gramos, marihuana de 1 gramo y ketamina de 0,2 gramos. Entonces ese es el hecho, la sustancia prohibida y esa es la situación fáctica que determina si eso, sin haber ninguna otra circunstancia que pudiera determinar que su representada aparte de la posesión tiene alguna injerencia en la comercialización dentro de la cárcel; de estas cuestiones es dable y es lógico también así como es posible señalar que esto es un microtráfico o puede ser un porte para consumo. No hay otro elemento que pueda cambiar la balanza para uno y otro. Y entiende la defensa que como un principio pro-imputado se debe estar a la situación más favorable a su representada, que es el porte para consumo, dado las exiguas cantidades de droga incautadas a su representada. Que si don Fernando Pérez la tuvo siempre a la vista, no fue corroborado por doña Margarita Cáceres y no es relevante. Su representada, dado su consumo habitual, pudo estar confundida y ese día a lo mejor compró camino a la sala de abogados o a lo mejor compró, como ella dice, yéndose de la sala de abogados, lo que da lo

mismo. Eso no es lo relevante para dilucidar esta situación. Sabemos por los dichos de los gendarmes, que hay bastante consumo, bastante tráfico dentro de la cárcel. Su representada también lo dijo. Ahí hay más que fuera de la cárcel. Entonces hay que estarse a los elementos fácticos que envuelven esta investigación y que son lo prohibido y lo prohibido son esas cantidades y no más que eso, que da cuenta más bien de un porte para consumo. A mayor abundamiento también el señor fiscal se centra en la justificación del artículo 4, dice a menos que justifique que estas sustancias están destinadas a un uso o consumo. Pero lo cierto es que el inciso tercero le da una obligación al tribunal que dice relación con que esta guarda no permita racionalmente suponer que están destinadas al uso o consumo, que sea el tribunal quien determine si esa cantidad racionalmente está destinada al uso o consumo o a la comercialización. No hay ningún otro elemento. Y eso es lo que la defensa solicita, que el tribunal acoja la tesis de la defensa, porque si esta causa, si estos hechos los hubiéramos ventilado fuera de una cárcel, no tiene ninguna duda que dadas esas exiguas cantidades de drogas, esta causa habría terminado por procedimiento monitoreo. No habría habido ninguna situación complicada en cuanto a la calificación jurídica, pero como está dentro del recinto, la persecución penal que realiza el fiscal es más acuciosa, es más severa por sus propias directrices. Por eso, esa es la función que se le pide por lo demás al fiscal. Pero no es lo que se le pide al tribunal. Al tribunal se le pide darle racionalidad a lo que se presenta.

Por lo tanto, de la prueba vertida, esos hechos no pueden sino constituir un porte para un consumo. La cantidad de droga que se le encuentra, la variedad de droga, tampoco puede ser una incidencia para decir si estamos frente a un microtráfico o frente a un porte para consumo.

Ahora bien, si se fuere del parecer que esto constituye un delito de microtráfico, la defensa entiende que no la perjudica ella, la agravante o calificante de responsabilidad del artículo 19 H, de la ley 20.000, porque a juicio de la defensa hay cierta contradicción y hay que darle alguna hermenéutica lógica y coherente a lo que señala el mismo artículo 19 letra H con lo que señala el artículo 51 de la ley 20.000 en cuanto a quiénes son

las personas a las que debe precisamente darles una mayor severidad en cuanto a la calificación jurídica y por ende a la pena que se le asigna. El artículo 51 de la ley 20.000 particularmente y expresamente señala que deben ser referidos a personas ajenas, cosa que no señala ex profeso el artículo 19 letra h de la ley 20.000. Debe darse una coherencia racional a la calificante. De acuerdo al artículo 63 del Código Penal en cuanto a que los hechos inherentes al delito no pueden constituir por sí mismos situaciones que agravan la situación penal de su representada; por lo tanto, solicita que esta agravante o calificante responsabilidad no se aplique, no está en el ámbito de ella determinar si puede o no cometer ese delito en el recinto penal o afuera, está adentro forzada a guardar reclusión; el consumo o tenencia de esa droga no depende de su voluntad como para determinar donde lo va a cometer, debiendo haber una penalización normal y no con el artículo 19 letra h de la ley 20.000.

Al replicar el Ministerio Público indica que la norma exige que se justifique el uso o consumo personal o el tratamiento. Lo que descarta claramente son las circunstancias, como señala bien el inciso tercero a lo que refiere el colega del artículo cuarto, en cuanto a que son las circunstancias visibles. Estas circunstancias visibles o estas circunstancias que vemos en el caso de marras es que tenemos una imputada primero que supuestamente, según su propia teoría, ella consumiría los 32 envoltorios de tres sustancias distintas el mismo día de la detención, en la tarde, lo que no se condice físicamente primero con la interna. Tenemos una apariencia de una persona normal, que no es la de un consumidor de cocaína base, lo que encontramos en la calle, que está todo el día consumiendo droga. Tenemos una persona que señala que va a consumir tres tipos de droga en 32 dosis en un mismo día y no tenemos que ella mantenga un tratamiento interno, ella señala que está haciendo actualmente un tratamiento psicológico los últimos seis meses, pero por la circunstancia de estar privada de libertad, no asociada a un tratamiento porque de eso no se ha presentado ningún medio de prueba por parte de la defensa. Respecto de ello discrepa porque efectivamente la droga que portaba, descarta efectivamente los antecedentes de un posible consumo; tiene 32 envoltorios ya dosificados con

tres sustancias distintas al interior de un centro de detención, en el cual ella está privada de libertad por tráfico ilícito de droga. Imputada que efectivamente tiene conocimiento de este tipo de delito, que ha estado privada de libertad, registra esa privación actual y además así se suministra por terceras personas de distintos envoltorios, de distintas sustancias de droga para ser traficadas claramente con esa misma situación a la que ella se dedica. La circunstancia efectivamente que el colega señala que el artículo 19 letra H se refiere al artículo 51, eso cree que es una errónea interpretación. El artículo 19 específicamente al iniciar el relato señala que “los delitos anteriores a que trata esta ley”, es decir, todo lo previo; el artículo 51 tiene una relación con el artículo 50 y no es previo al artículo 19 en la redacción. De la simple lectura de la redacción del artículo 19 excluye el artículo 51.

La Defensa **no hace uso** del derecho a réplica.

SÉPTIMO: Valoración de la prueba. Que, en términos generales, los antecedentes aportados por el ente acusador a lo largo del juicio, con el objeto de acreditar el presupuesto fáctico de su acusación, impresionaron como idóneos en cuanto a su pertinencia y verosimilitud.

Que del testimonio de los deponentes se establece que los hechos ocurrieron el día 14 de junio de 2023, en horas de la mañana, en el Centro Penitenciario Femenino “Mayor Marisol Estay”, ubicado en San Francisco N° 4756, comuna de San Miguel .

Del mismo modo se debe tener presente que los funcionarios de gendarmería Fernando Pérez Gutiérrez y Margarita Cáceres Rivera, fueron contestes y complementarios en señalar los hechos del día 14 de junio de 2023:

1° Que el día señalado, el Cabo Segundo de Gendarmería Pérez Gutiérrez cumplía funciones en la reja 3 de la Cárcel de San Miguel, ubicada en San Francisco N° 4756 - Centro Penitenciario Femenino “Mayor Marisol Estay”-. Explica que la reja 3 es un punto de control donde las internas vienen con una ficha donde las derivan donde corresponde. Agrega que la interna González Neira es del Módulo 4 y que venía desde la sala de abogados, a la que observó con actitudes sospechosas. Explica que la vio

previo a entrar a la sala de abogados, y ella entraba, salía, lo miraba y que al salir la ve que lo mira. Observó el nerviosismo de la interna que quería esconderse algo en los bolsillos. Le avisó a la Teniente Cáceres que hay interna para revisar y le da unas señas, ya que la interna habitaba el módulo 4. Explica que no es testigo de la revisión, que es la Teniente la que le avisa que le incautó droga - Pilló 20 envoltorios de papel cuadriculado contenedores de color cocaína, dos envoltorios de papel cuadriculado de cannabis sativa y 2 contenedores de ketamina, pesando 3,1 grs, 2,1 grs y 0.4 grs, respectivamente- verificándose con la prueba de campo la droga.

2.- Por su parte la Teniente Segundo de Gendarmería, Margarita Cáceres Rivera, en concordancia en lo sustancial con el testigo analizado precedentemente señala que el día 14 de junio de 2023, en horas de la mañana, se encontraba de jefa del módulo 4 en la Cárcel de San Miguel, y recibió un llamado del Cabo Pérez que estaba en la sala de abogados y le dice que la interna Katherine González Neira estaba sospechosa .

Por lo anterior, cuando la interna regresa la pasa al baño, la revisa, y le incauta desde el bolsillo del pantalón 20 contenedores con 3,1 grs de cocaína, 2 envoltorios de 0,4 grs bruto de ketamina y 10 envoltorios de cannabis sativa con 2.1 grs. Previamente le preguntó si traía algo oculto o le habían entregado algo dice que no, se saca el poleron y lo revisa y luego al revisar el pantalón encuentra las sustancias. Se efectuaron las pruebas de campo correspondientes.

Que, en concordancia con los testimonios anteriores , se acreditó con la prueba documental y pericial, que se incautó en poder de la acusada, que las sustancias incautadas correspondían a:

- 20 envoltorios de papel cuadriculados contenedores de cocaína base con un peso neto de 0.9 gramos;
- 02 envoltorios de papel cuadriculados contenedores de Ketamina con un peso neto de 0,2 gramos; y
- 10 envoltorios de papel cuadriculados contenedores de Cannabis Sativa – Marihuana, con un peso neto de 1 gramo.

Que el relato de **MARGARITA JOSEFA CÁCERES RIVERA, Teniente Segundo de Gendarmería**, resultó ilustrativo para estas juezas, ya que durante su declaración se exhibieron fotografías en las que estas sentenciadoras pudieron apreciar las sustancias que le fueron incautadas a la acusada.

OCTAVO: Hechos acreditados. Que, de acuerdo con lo referido en el considerando anterior sobre *valoración de la prueba*, apreciada libremente, según lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, las sentenciadoras han llegado a la convicción, tal como se adelantó por el tribunal en el veredicto, que es posible dar por acreditado el siguiente hecho:

“El día 14 de junio de 2023, en horas de la mañana, en el Centro Penitenciario Femenino “Mayor Marisol Estay”, ubicado en San Francisco N° 4756, comuna de San Miguel, la interna KATHERINE ALEJANDRA GONZÁLEZ NEIRA, privada de libertad por causa de un tribunal de San Bernardo, por el delito de tráfico ilícito de drogas, fue sorprendida portando, teniendo y poseyendo la cantidad de 20 envoltorios de papel cuadriculados contenedores de cocaína base con un peso neto de 0.9 gramos; la cantidad de 02 envoltorios de papel cuadriculados contenedores de Ketamina con un peso neto de 0,2 gramos; y la cantidad de 10 envoltorios de papel cuadriculados contenedores de Cannabis Sativa – Marihuana, con un peso neto de 1 gramo; todo ello con fines de ser transferidos y consumidos por terceras personas, sin contar con autorización competente”.

NOVENO: Calificación Jurídica.- Que, determinado así el sustrato fáctico, apareció concluyente que éste califica dentro del enmarcado típico del ilícito de ***Tráfico Ilícito de Pequeñas Cantidades de Sustancias Estupefacientes o Psicotrópicas***, ello dentro de los presupuestos de *tenencia, posesión y porte de Cannabis Sativa, Pasta Base de Cocaína y Ketamina* contemplados en dicha figura legal, lo que se halla acorde con la imputación que le fue formulada por el acusador estatal y que previene y sanciona el artículo 4° en relación con los artículos 1° y 3° de la Ley N° 20.000.

En efecto, teniendo en vista el desarrollo gradual en que se desarrollaron estos sucesos quedó claro que aquí se cumplieron los verbos rectores del ilícito tratado de “*Tráfico*”, en cuanto tal término, acorde a lo explicitado por el mismo legislador, abarca las acciones de “*importar, exportar, transportar, adquirir, transferir, sustraer, poseer, suministrar, guardar o portar*” sustancias estupefacientes, desde que en la secuencia tratada el sujeto activo del ilícito realizó la conducta específica de tener, poseer y portar sustancias sicotrópicas, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, sin la debida autorización

En comunión con lo dicho, igualmente se estableció a través de la diversa prueba documental y pericial introducida en audiencia por lectura resumida del ente persecutor que las dosis en comento, consistían efectivamente en *Cannabis Sativa, Pasta Base de Cocaína y Ketamina*, clasificando todas dentro de las drogas incluidas en la Ley N° 20.000, como en el Reglamento respectivo, conforme a la reseña de la naturaleza y cantidades existentes de dichas sustancias, concluyendo los informes respectivos que se trataban incuestionablemente de tales psicotrópicos, declarados ilícitos por el legislador debido a que constituyen sustancias adictivas y por los graves efectos tóxicos o daños considerables en la salud pública, al acarrear dependencia física y psíquica en las personas, bien jurídico que incuestionablemente se vio vulnerado y en peligro en el caso *sub-iudice* y que por lo mismo se encuentra amparado expresamente por el legislador tipificándolo dentro de su catálogo punitivo de delitos.

Respecto al *Iter Criminis*, este delito resultó *consumado*, desde que se logró determinar que la acusada desplegó todas y cada una de las acciones descritas en el tipo penal en estudio que permitían configurarlo, verificándose estas situaciones, quedando así en su mayor grado de perfección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° del Código Penal.

Por otra parte, se desestima la calificación jurídica propuesta por la Defensa, consistente en que se trataba de un porte de droga para el consumo, pues no se justificó que dichas sustancias estuvieran destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, solo se cuenta con la declaración de la

acusada en el sentido de que la droga era para su consumo, que la adquirió para ello y que en la calle también se drogaba, no existiendo ninguna corroboración objetiva de aquello. Además, al tenor del artículo 4 inciso 3 de la ley 20.000, la droga poseída no permite racionalmente suponer que está destinada al uso o consumo personal y próximo en el tiempo, por tratarse de tres tipos de sustancias y considerando la cantidad de dosis, ya que estaban dispuestas en treinta y dos contenedores.

DÉCIMO: Autoría y participación. Que, si bien no se encuentra discutido que el día de los hechos la acusada fue sorprendida teniendo, portando y poseyendo pequeñas cantidades de droga, para ello se contó con la prueba analizada en el basamento séptimo y que se tiene por reproducida para todos los efectos legales, en marcándose su conducta en el núcleo del tipo penal de microtráfico ilícito de drogas del artículo 4° de la Ley 20.000, correspondiéndole a la acusada participación en calidad de autora conforme a lo prevenido en el artículo 15 número 1 del Código Penal. A mayor abundamiento los funcionarios de Gendarmería de Chile la señalan por su nombre y **FERNANDO BENJAMÍN PÉREZ GUTIÉRREZ, Cabo Segundo de Gendarmería**, además la sindicó en la sala de audiencias como la persona a la que se refirió en su declaración.

UNDÉCIMO: Calificante especial del artículo 19 letra h) de la ley N°20.000. Que, respecto de esta circunstancia especial de determinación de pena, las sentenciadoras estiman que, en la especie, **concorre** dicho supuesto, toda vez que, con la declaración de los testigos ha quedado establecido, más allá de toda duda razonable, que el delito fue cometido en un lugar de reclusión, tal como dispone la norma, esto es, en el interior del Centro Penitenciario Femenino “Mayor Marisol Estay”, ubicado en San Francisco N° 4756, comuna de San Miguel.

Del mismo modo se debe tener presente que los dichos de los funcionarios de gendarmería, al referirse al lugar de ocurrencia de los hechos, fueron contestes en señalar que se sorprende a la imputada – que es interna de dicho lugar- portando, teniendo y poseyendo la droga en el interior del Centro Penitenciario, cuando se devolvía desde la sala de abogados.

Al respecto es importante revisar lo sostenido jurisprudencialmente sobre esta agravante, en cuanto a que el objetivo que buscó el legislador con la imposición de esta norma, es la necesidad de evitar el consumo de drogas por parte de los internos en los establecimientos carcelarios, siendo entonces la finalidad de la agravante, evitar la difusión de estupefacientes en comunidades que se pueden ver más amenazadas por el peligro de las drogas y el daño que puede provocar en procesos de rehabilitación y reinserción en el interior de los penales.

Es por esto que, en el caso de marras, no es posible sostener las argumentaciones de la defensa, en el sentido de que no se configura la agravante porque:

a.- El fundamento del artículo 63 del Código Penal, es resguardar el principio de non bis indem, esto es, que las mismas circunstancias contempladas en el tipo penal base, no se vuelvan a considerar para el fundamento de la agravación la conducta.

b.- En opinión de estas juezas, el aumento de la penalidad no se efectúa por un hecho ya contemplado en el tipo básico, sino que por la especial circunstancia de cometer la conducta en un recinto penitenciario, el que constituye un lugar especialmente protegido por el legislador en razón que irroga un mayor riesgo de difusión de las sustancias prohibidas. En consecuencia, la circunstancia agravante o calificante, no es inherente al delito, esto es, al tipo penal del artículo 3° o 4° de la ley de drogas.

c.- Además, la norma del artículo 19 letra h de la ley 20.000 importa una agravación de la pena en virtud de una circunstancia objetiva cual es cometer el delito en un recinto penitenciario. Además, consideramos que no se trata de que quienes se encuentran reclusos en un recinto penitenciario no están en condiciones de elegir el espacio físico en el cual pueden cometer el delito de tráfico, pues bien pueden elegir no delinquir mientras están reclusos, y hacerlo implica una mayor refractariedad.

d.- No resulta atingente recurrir al artículo 51 de la Ley de drogas y utilizar una interpretación por analogía para fundamentar esta posición, recurriendo al principio pro-reo, pues dicho tipo de interpretación es de

carácter subsidiaria, pues cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal. Por lo demás, dicha norma dice relación con las faltas, no con el delito de microtráfico, injustos que por magnitud no son comparables tampoco.

e.- Además, el objetivo de la agravación de la sanción es evitar el consumo de drogas en estos recintos carcelarios, y la conducta de la acusada era, justamente, portar, tener y poseer al interior del penal sustancias ilícitas, con el consecuente peligro de la difusión de estupefacientes en la población penal.

DUODÉCIMO: Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

1° Que conforme el extracto de filiación y antecedentes incorporado, la sentenciada no goza de irreprochable conducta anterior.

2° En cuanto a la atenuante contemplada en el artículo 11 N°9 del Código Penal, estas jueces NO la estimamos concurrente, puesto que al prestar declaración la acusada dio una versión de los hechos tendientes a aminorar su responsabilidad señalando que la droga era para su consumo personal, lo que no fue acreditado, motivo por el cual sus dichos no pueden ser considerados como una contribución efectiva al esclarecimiento de los hechos.

DÉCIMO TERCERO: Determinación de la pena. Que la pena prevista por la ley para el delito del tráfico ilícito de estupefacientes de pequeñas cantidades es la de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 10 a 40 unidades tributarias mensuales.

Que, por una parte, le afecta a la acusada la norma de determinación de pena, de la letra h) del artículo 19 de la Ley 20.000, por lo que la pena a imponer deberá aumentarse en un grado. Considerando lo anterior, el Tribunal aumentará la pena un grado, según lo ordenado en la norma de la letra h) del artículo 19 de la Ley N°20.000, y como no benefician ni perjudican a la acusada circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal, el tribunal la aplicará en el mínimo teniendo a su vez en consideración la forma y circunstancias de comisión del delito y se le

condenará en definitiva a la pena que se dirá en lo resolutivo de este fallo, por estimar que dicha sanción se ajusta a derecho y resulta proporcional.

En cuanto a la multa a imponer, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 70 del Código Penal, y atendido el caudal económico de la sentenciada que se presume pobre al estar representada por la Defensoría Penal Pública, se impone una multa inferior al mínimo señalado en la ley, cuyo quantum se dirá en lo resolutivo.

DÉCIMO CUARTO: *En cuanto a la forma de cumplimiento.* Que, NO reuniéndose en este caso los requisitos de la ley 18.216 y lo dispuesto en el artículo 62 del Código Penal, NO se sustituye a la sentenciada el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta por alguna pena sustitutiva, por lo que deberá cumplir la pena corporal de forma efectiva, no habiendo abonos que considerar a su favor, de conformidad al certificado del Ministro de Fe del tribunal incorporado.

DÉCIMO QUINTO: *Comiso.* Que atendido lo dispuesto por la ley 20.000 y el artículo 31 del Código Penal se decreta el comiso de la droga y contenedores incautados a la sentenciada.

DÉCIMO SEXTO: *Ley N° 19.970.* Que, estas juezas estuvieron por no disponer la toma de muestras biológicas a la sentenciada a fin que se incluya en el registro del ADN, considerando que el ilícito materia de esta sentencia es un delito de tráfico de pequeñas cantidades de drogas o sustancias estupefacientes, que no se encuentra contenido explícitamente en el artículo 17 letra c) de la ley 19.970, disposición que se refiere únicamente a los delitos de elaboración o tráfico de drogas, que claramente son los crímenes referidos en los artículos 1 y 3 de la ley 20.000, cuya gravedad, en cuanto a la penalidad resulta asimilable a los ilícitos de carácter terrorista a que alude sucesivamente la letra c) del artículo 17, contexto normativo en el cual, claramente, no se encuentra comprendido el microtráfico, que sólo es un simple delito.

DÉCIMO SÉPTIMO: Costas. Que no se condena al pago de las costas a la acusada toda vez que su defensa técnica está asumida por la Defensoría Penal Pública, atendido lo dispuesto en el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 3, 5, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 21, 25, 26, 29, 50, 62, 67, 70 y 76, del Código Penal; Ley 20.000 y Reglamento de la misma, artículos 1°, 4, 36, 45, 47 inciso final, 281, 295, 296, 297, 309, 314, 315, 325, 328, 329, 330, 333, 339, 340 al 344 - *ambos inclusive* - 348 del Código Procesal Penal, artículo 600 Código Orgánico de Tribunales, Ley 18.216, Ley N° 18.556 y Ley 19.970, **SE DECLARA:**

I.- Que se CONDENA a KATHERINE ALEJANDRA GONZÁLEZ NEIRA, ya individualizada, como autora del delito consumado de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, previsto y sancionado en el artículo 4° con relación al artículo 1° de la Ley 20.000, cometido el día 14 de junio del 2023, en la comuna de San Miguel, a la pena de TRES AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, **SIN COSTAS.**

II.- Que, se le condena al pago de una **MULTA DE UN TERCIO DE UNIDAD TRIBUTARIA MENSUAL.**

III.- Que se dispone el **COMISO** de la droga y contenedores, incautados a González Neira.

IV.- Que, NO reuniéndose en este caso los requisitos de la ley 18.216 y atendido lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 20.000 la sentenciada deberá cumplir la pena corporal en forma efectiva, sin que existan abonos a su favor.

Una vez ejecutoriado el presente fallo, remítanse los antecedentes pertinentes al Juez de Garantía correspondiente, para los efectos del cumplimiento de esta sentencia, y a cuya disposición se pondrá también en dicha oportunidad, a la sentenciada. En su oportunidad, dése cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 18.556.

Sentencia redactada por la magistrada doña Silvana Verónica Vera Riquelme.

ROL ÚNICO: 2300650901-0.

ROL INTERNO: 191-2024.

PRONUNCIADA POR EL SEXTO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO, CUYA SALA ESTUVO INTEGRADA POR LA MAGISTRADA DOÑA GABRIELA CARREÑO BARROS, COMO PRESIDENTA Y LAS MAGISTRADAS DOÑA SILVANA VERA RIQUELME COMO REDACTORA Y DOÑA MARÍA ALEJANDRA ROJAS CONTRERAS COMO TERCERA JUEZA INTEGRANTE.